

COMENTARIO AL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO

Lucía ÁLVAREZ MOSSO
Ma. Luisa GONZÁLEZ M.*

El Plan Global de Desarrollo es, para los fines de la acumulación capitalista, de justificación ideológica y de control político, un plan consecuente con la política del presente sexenio.

Entre las metas que el PGO plantea había que distinguir cuáles serán objeto de una acción real y cuáles son sólo parte del lenguaje gubernamental para mantener el engaño ideológico.

Dentro de las metas reales, el interés gubernamental se centra en allanar el camino para que los empresarios incrementen sus inversiones. En este sector, el mayor énfasis se pone en el gran capital especialmente en aquellos renglones que orienten la estructura productiva hacia la generación de bienes básicos y a la consolidación de una industria de bienes de capital. Asimismo está presente la necesidad de que, sobre la base de atractivas ganancias, una parte del capital canalice sus recursos hacia la agricultura. En dichas direcciones el Estado no ha modificado sustancialmente su política: estímulos fiscales, estímulos a la producción, subsidios, facilidades de financiamiento. Cuenta, sobre todo para cumplir con una polí-

* Investigadoras del IIEC-UNAM.

tica rectora más eficaz, con el recurso más importante que le ha caído a las manos en los años recientes: los recursos petroleros. El Estado ha puesto, y con razón, especial cuidado en los energéticos como «palanca básica» de desarrollo. Es innegable que todos estos factores impulsan al desarrollo capitalista, pero no hay que olvidar que tal desarrollo está en la punta de sus contradicciones agudizadas en la crisis de la que aun no ha salido, contradicciones que en lo fundamental afectan a las clases populares, que han visto deteriorarse de una manera vertical sus niveles de vida, pero que también han afectado a sectores importantes del capital por los obstáculos que la crisis impone en la venta de la producción, por la inflación (a la cual no hay plan capitalista que pueda frenarla), por el desorbitado desempleo. En este punto habría que recordar que la acumulación de capital requiere del ejército industrial de reserva, que los desocupados son una condición para el abaratamiento de la fuerza de trabajo, pero en esta situación de crisis el sistema ha rebasado los límites deseables (para los fines de ganancia) de desempleo. Una masa de millones de individuos que no perciben salarios, reducen necesariamente el consumo de productos finales y por tanto las probabilidades de realización de una parte de la plusvalía social. Por eso al Estado le interesa solucionar en parte, nada más *en parte*, el problema del desempleo, pues no hay ni intención ni perspectivas de solucionarlos plenamente; no obstante, es el sector gubernamental quien tiene que asumir, en mayor medida, el papel de empleador,¹ en vista de que los empresarios privados siempre procuran ahorrar trabajo dentro de sus empresas y sacarles el máximo beneficio posible a sus trabajadores.

Dentro del PGD se menciona que el modelo de país a que se aspira es aquel que incluya un «sistema productivo eficaz y eficiente; un sistema distributivo que permita el equilibrio entre los factores; un sistema político que se sustente en las mayorías y dé cabida a las minorías, y una administración pública capaz de dirigir el desarrollo económico».

De todas estas aspiraciones conviene detenernos por el momento en aquellas que se refieren al sistema productivo, dejando para después la crítica a la ideología manejada por el Estado a lo largo de este Plan.

El «sistema productivo eficaz y eficiente» se orienta hacia dos sectores prioritarios: el agropecuario y el de energéticos. El porqué

¹ Durante el auge esta función fue cubierta por el Estado con el incremento de la burocracia, pero en la crisis, aun este recurso tuvo que limitarse.

de estas prioridades aparentemente se plantea en el mismo Plan: satisfacer la demanda de alimentos y generar recursos para administrar la crisis y favorecer transformaciones profundas en la sociedad.

Sin embargo, las verdaderas causas que motivaron al Estado a plantear el fortalecimiento y modernización del sector agropecuario aparecen veladas. La necesidad de desarrollar este sector se relaciona directamente con el hecho de que conforma una buena parte de los bienes-salario, es decir, su atraso o modernización repercuten en el costo de la vida obrera.

En este sentido el encarecimiento de los alimentos significa una elevación en el costo de reproducción de la clase trabajadora y por lo tanto la necesidad de esta clase de luchar y exigir un aumento de salarios, mismo que repercutirá en las ganancias de la clase capitalista en su conjunto. De ahí, pues, que se aplique una política tendiente a reducir el costo de producción de los artículos de primera necesidad para abaratar el valor de la fuerza de trabajo y beneficiar a los capitalistas.

Para lograr este objetivo interviene el Estado, otorgando apoyos a la agricultura, sobre todo destinando aproximadamente el 22% de la inversión pública a esta actividad. Junto con esto se desarrolla una campaña de control al movimiento campesino a través de hacerles creer que tanto el gobierno como el campesino correrán los riesgos de la producción de alimentos, sin señalar que la modernización agrícola tiene sus límites en el desarrollo industrial y que éste es incapaz de absorber una buena parte de la mano de obra que generaría una aceleración del desarrollo capitalista en el campo. De ahí que el gobierno se encuentre con serias dificultades y para tratar de mantener al campesino ligado a la tierra señale que se impulsará la agricultura en las tierras de temporal.

En resumen esta política expresada en el Plan lo que hace es: abaratar el valor de la fuerza de trabajo, favorecer al sector capitalista desarrollado en el campo, controlar ideológica, orgánica y políticamente al campesino y finalmente prometerle ayuda para su agricultura de temporal para de esta manera tratar de impedir que emigre a las ciudades y se convierta en una fuerza de presión popular.

El otro sector prioritario es el de energéticos. Es ampliamente conocido que a través de los recursos que genere la exportación de petróleo se espera realizar cambios en la orientación de la economía y en particular en la industria.

Con respecto a esta última, el Plan señala que se reorientará la estructura productiva hacia los bienes básicos y a desarrollar la producción de bienes de capital.

La preocupación que se muestra por desarrollar la industria de bienes de consumo popular se relaciona, como ya veíamos en párrafos anteriores, con la necesidad de la burguesía de abartar los bienes-salario.

La creación de una industria de bienes de capital corresponde a la etapa de desarrollo capitalista de la economía mexicana, planteándose el impulso o la creación de nuevas empresas que produzcan bienes de capital tales como: en primer lugar, maquinaria o partes para la industria petrolera, eléctrica o siderúrgica; en segundo lugar, maquinaria o herramientas para la agricultura y algunas industrias de bienes de consumo popular y, finalmente, bienes intermedios como la petroquímica.

Si se logra crear o impulsar todas estas industrias ello traerá como consecuencia un fortalecimiento del desarrollo capitalista, lo que a su vez significa la agudización de las contradicciones que se pretenden combatir: se agravan el desempleo y la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, se empobrece aún más la población, crecerá la concentración urbana y con ella la falta de vivienda, de servicios, etcétera, y finalmente crecerá también la clase obrera.

¿Por qué afirmamos esto?

En primer lugar, porque la industria de bienes de capital, para que sea productiva, necesita ser ahorradora de mano de obra, es decir, sus niveles de ocupación son reducidos en términos relativos.

En segundo lugar, porque dadas las condiciones privilegiadas que se le otorgan la parte más importante de ellas tendrían un mercado seguro para sus productos, sobre todo las que surten a PEMEX y CFE, obteniendo altas ganancias. Como además este tipo de industrias requiere de grandes inversiones de capital y están en alianza el capital privado —nacional y extranjero— y el estatal, se acrecentaría la fuerza de los grandes monopolios en las ramas básicas y a través de ellos aumentaría su control de otras industrias.

Para que el fortalecimiento de las grandes empresas no signifique la desaparición de las pequeñas y medianas, el Estado se comprometerá a protegerlas. Este apoyo tiene su base no sólo en la necesidad de mantener el empleo actual, como se nos quiere hacer creer, sino fundamentalmente en la transferencia de ganancias de las pequeñas y medianas empresas a las grandes.

Otro objetivo de la política productiva anunciada en el Plan es la descentralización industrial y la creación de nuevos polos de desarrollo sobre todo en ciudades intermedias en el interior y a lo largo de costas y fronteras. Tal parece que al Estado y a la burguesía sí

les interesa apoyar la descentralización industrial, tanto por los problemas económico, político y social que trae consigo, como por las ventajas que pueden llegar a obtenerse. Las zonas prioritarias son aquellas que están cerca de regiones petroleras o del mercado estadounidense; así por ejemplo: se mencionan los puertos de Coatzacoalcos, Tampico, Salina Cruz, etcétera, y en cuanto a las zonas fronterizas destacan Baja California y Chihuahua. Las empresas que se establezcan en dichas zonas tendrán una serie de ventajas tales como: cercanía a las fuentes de materias primas, mano de obra barata, energéticos, estímulos fiscales y el compromiso del Estado de crear las obras de infraestructura necesaria, así como mejorar el transporte ferroviario. Como se puede ver, con esta política se favorece principalmente a los capitalistas, a quienes se les otorga toda clase de garantías para que obtengan altas utilidades.

En cambio, para quienes no se anuncia una política de protección en el Plan es para los trabajadores. Los obreros ocupados en las nuevas empresas además de que tendrán un salario más bajo que los de México, y menores prestaciones económicas, verán agudizados los ataques a sus organizaciones sindicales. El caso de la huelga de General Motors es ilustrativa de este problema: se impide que los obreros de la planta de Ramos Arizpe obtengan las mismas ventajas que los de México, por medio de la creación de dos sindicatos para la misma empresa.

Si analizamos las 22 políticas básicas que integran la estrategia de este Plan las podríamos sintetizar en el objetivo de incrementar la explotación de la clase obrera a través de: 1) modernizar los sectores de la economía; 2) estimular la productividad; 3) capacitar la mano de obra y mejorar la organización del trabajo; 4) vincularse al exterior para que se estimule la modernización y eficiencia del aparato productivo; 5) reorientar la estructura productiva hacia la generación de bienes básicos y a la creación de bienes de capital; 6) modernizar la agricultura, y 7) la política de bienestar social, etcétera.

No podría faltar el aderezo ideológico, el uso de la fantasía política —para llamarlo de alguna manera—, cuyo propósito es mantener la imagen de un Estado que representa los intereses de todas las clases sociales, un Estado que además defiende a la nación frente al extranjero. Entonces se promete la independencia económica, política y cultural; se asegura que el Plan contempla atender los problemas en materia de empleo, alimentación, salud, vivienda y mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de la producción y las regiones geográficas. La armonía de las

clases sociales se alcanza siempre en los planes gubernamentales: todos trabajando para todos.

Para cerrar con broche de oro el Estado reitera su necesidad de legitimización y consigue el apoyo de una amplia variedad de corrientes. Diferentes sectores burgueses se apresuran a aplaudir el Plan. Entre otros podrán señalarse la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la Central Campesina Independiente y la Confederación de la Pequeña Propiedad, y para que no parezca orquestado la propia Secretaría de Programación y Presupuesto publica un documento «autocrítico» en donde señala que el pgd es ambiguo, limitado, incongruente, etcétera... y no cumplirá sus metas de justicia social. ¿De verdad creen dichos analistas que ése es el objetivo? Consideramos que no lo piensan así, pero para fines ideológicos la «polémica» y la «autocrítica» juegan un papel: dar la imagen social de que la clase en el poder está pendiente de los intereses populares, de su discusión, y que las soluciones surgen a partir del enfrentamiento de ideas.